

La economía frente al conflicto armado interno colombiano, 1990-2006*

*Germán Valencia***

—Introducción. —I. El análisis económico del conflicto. —II. Actores, comportamientos y recursos en el conflicto colombiano. —III. Los costos económicos y sociales del conflicto. —Conclusiones. —Referencias bibliográficas.

Primera versión recibida en noviembre de 2006; versión final aceptada en diciembre de 2006

Resumen: este artículo hace una revisión de la literatura publicada entre 1990 y 2006 sobre el análisis económico del conflicto armado interno colombiano. Presenta, en su primera parte, los esfuerzos analíticos que la economía viene realizando de las acciones indebidas de los agentes; en la segunda, examina el conflicto armado interno colombiano destacando actores, comportamientos e incentivos; en la tercera, se hace un análisis del conflicto mostrando los costos económicos y sociales y la necesidad de trabajar más en estos cálculos. Finalmente se concluye y se hace una invitación a realizar esfuerzos investigativos más integrales que incluyan

en el análisis los componentes políticos y criminales que también tiene el conflicto colombiano.

Palabras claves: conflicto armado interno, guerra y economía, coyuntura política colombiana, costos económicos y sociales del conflicto.

Clasificación JEL: *D74, E11, E62, N26, O11*

Abstract: this article makes a review of the literature published between 1990 and 2006 about economic analysis of Colombian internal conflict. First, we present the analytical efforts that economics has

* Este escrito contó con el apoyo del proyecto Estrategia de Sostenibilidad 2005-2006 del Grupo de Investigación de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, que hace parte del apoyo financiero que brinda al Grupo el Comité de Desarrollo de Investigaciones (CODI) de la Universidad de Antioquia. El autor expresa sus agradecimientos a los profesores Manuel Alberto Alonso E. y Jorge Giraldo Ramírez, a los estudiantes del Seminario de Investigación I: Teorías y métodos en el estudio de la guerra, de la línea Guerra, conflicto armado y dinámica social, de la Maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos, segundo semestre de 2006, y los evaluadores externos de la revista; sin embargo, asume toda la responsabilidad por la versión final.

** Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y miembro de los grupos de investigación Estudios Políticos y Microeconomía Aplicada de la misma universidad. Dirección electrónica: german.valencia@udea.edu.co.

been doing about improper actions of agents; second, we examine colombian internal armed conflict standing out actors, behaviors and incentives; and at the end, we make an analysis of the conflict, showing economic and social costs and the necessity to work more on this calculus. Finally, we conclude and make an invitation to do research efforts more integrals which include in the analysis political and criminal components that are part of colombian conflict.

Key words: internal armed conflict, war and economy, colombian political situation, economic and social costs from the conflict.

Résumé: cet article fait une révision de la littérature publiée entre les années 1990 et 2006 à propos de l'analyse économique du conflit interne colombien. Le texte présente dans une première partie, les efforts analytiques que l'économie fait d'une manière continue sur les actions indues des agents. Dans une deuxième partie, il examine le conflit armé colombien en remarquant des acteurs, des comportements et des incitations. Dans une troisième partie, il est fait une analyse du conflit en montrant les coûts économiques et sociaux, également il est montré la nécessité de travailler fort sur ces calculs. Finalement, on arrive à une conclusion et on invite à la réalisation des efforts de recherche plus intégraux qui comprennent les composants politiques et criminels appartenant du conflit colombien.

Mots clef: conflit armé interne, guerre et économie, conjoncture politique colombienne, coûts économiques et sociaux du conflit.

Introducción

El conflicto armado interno colombiano se ha convertido en un tema cada vez más recurrente en la agenda de investigaciones de los economistas nacionales. La razón de tan creciente interés se debe a que éste fenómeno político afecta a gran parte de las variables económicas; como por ejemplo, el producto interno bruto, el bienestar social, la inversión privada, el gasto público y el consumo de las familias. Lo extraño es que a pesar de la reconocida importancia y de que en el país ha tenido presencia desde hace varias décadas del conflicto armado (un ejemplo es La Violencia del decenio de 1950), los economistas no habían asumido su estudio con propiedad; eran otras ciencias sociales, como la sociología, la ciencia política y la historia, las que lo analizaban. Solo a mediados de la década de 1990 los economistas colombianos comenzaron a estudiar el conflicto, introduciendo el rico y amplio espectro de enfoques que tienen para analizar los diversos fenómenos sociales.

En el contexto internacional la situación ha sido distinta. Desde hace más de cincuenta años, la economía viene elaborando un conjunto de teorías que le permite estudiar acciones "indebidas" de los agentes; como guerras, violencias, crímenes y delitos, entre otras. Tanto neoclásicos como institucionalistas y marxistas han logrado desarrollar en este período un arsenal metodológico que les posibilitan comprender el comportamiento y efecto que tiene sobre la economía las actividades conflictivas. Desarrollos teóricos que han sido bien recibidos por los economistas colombianos, quienes vienen utilizándolos de manera progresiva para estudiar el conflicto

armado interno. El resultado, en tan solo un par de décadas, es una extensa lista de trabajos sobre el fenómeno de la violencia política en el país, que ha enriquecido los ya tradicionales enfoques sobre el conflicto y que permiten explicaciones novedosas y sugestivas propuestas para afrontar el posconflicto.

El objetivo de este artículo es tan solo hacer una síntesis de los distintos trabajos que la economía ha hecho del conflicto armado interno colombiano, durante el período 1990-2006. Para esto, en la primera sección, el artículo pasa revista por los principales desarrollos teóricos donde la economía ha incorporado el conflicto en sus modelos; y que sirve como instrumento metodológico para analizar, en la segunda y tercera sección, el conflicto colombiano. En las dos siguientes secciones se presenta, primero, algunos estudios que identifican actores, comportamientos e incentivos (recursos) del conflicto; segundo, los análisis sobre los costos económicos y sociales del conflicto; pues este afecta no solo a los implicados directamente en él, sino también al conjunto de la sociedad, donde se incluye a la población civil y a los países vecinos. Finalmente se concluye y se hace una invitación a realizar esfuerzos investigativos más integrales que incluyan en el análisis los componentes políticos y criminales que también tiene el conflicto colombiano.

Esta última anotación sirve como pretexto para advertir que a pesar de lo importante que resulta para el análisis del conflicto armado interno colombiano el enfoque económico, este deja por fuera otros aspectos fundamentales, resultando, por tanto, parcial sus conclusiones. Pues, además de los costos económicos que se señalarán

en el artículo, existen otros costos, no calculados por la economía, que son fundamentales para la estabilidad y bienestar del país; entre los que cabría mencionar: la pérdida de legitimidad del Estado, la progresiva privatización de la seguridad y de la justicia, los impactos migratorios (desplazamiento forzado interno) y la violación de los derechos humanos. Todos ellos, afectando de forma negativa las instituciones, las políticas públicas y los programas sociales, generando retrasos en los procesos de desarrollo y bienestar de la población colombiana e, incluso, la de los países vecinos. Estos ejemplos son suficientes para evidenciar la debilidad que tienen los análisis netamente económicos del conflicto armado interno.

I. El análisis económico del conflicto

Como es costumbre en la economía, los análisis sobre el conflicto se inician en la literatura con *La Riqueza de las Naciones* (1776) de Adam Smith; pero en este caso, no para mostrar que con este autor nace la teoría económica del conflicto, sino para destacar el abandono en que la ciencia económica había mantenido a este tema (Restrepo, 2001). Tanto clásicos como neoclásicos han realizado sus análisis en situaciones ideales, donde no existen conflictos y, por tanto, hay incentivos para que los agentes acumulen riquezas y capital. Las dos escuelas parten del supuesto que los derechos de propiedad están bien definidos y existen instituciones que los hacen respetar; los agentes económicos son racionales, toman decisiones, utilizan recursos escasos y eligen de manera óptima, acatando la ley y manteniendo el orden.

Es solo a principios del siglo XX, con Vilfredo Pareto (1946), cuando se logra introducir el conflicto en la economía. Este autor ve el conflicto “como una pugna por la distribución de la producción cuyo efecto es desviar recursos de actividades productivas hacia actividades improductivas” (Restrepo, 2001, p. 2). Similar esfuerzo hace el marxismo, que enfoca el problema en la lucha de clases y ve la sociedad en la historia como grupos en conflicto. También el institucionalismo (T. Veblen y J. Commons (1927 y 1934)), que relaja el supuesto de derechos de propiedad e introduce en este factor la causa del conflicto en la economía. Lo trágico es que a pesar de lo importante de estos tres aportes, la economía los mantuvo en el olvido. En su lugar se impusieron de nuevo los análisis del mercado bajo el supuesto de derechos de propiedad bien definidos y la ausencia de conflictos (Arrow y Debreau, 1950, citado por Arrow, 1963). Ratificando el abandono en que siempre los economistas ortodoxos habían tenido el análisis de las situaciones conflictivas.

Un valioso aporte lo hizo en la década de 1960 Gary Becker (1968 y 1980), quien logró introducir en el modelo neoclásico situaciones conflictivas como el crimen y el delito (Querubín (2003) y Martínez (2001)).¹ Sin embargo un esfuerzo superior lo había hecho Trygve Haavelmo (1954)

una década antes, quien, siguiendo los planteamientos de Pareto, propuso un modelo que explicaba la presencia de actividades conflictivas en la economía como guerras, extorsiones y crímenes. Presentó el conflicto como “una expresión de la lucha por la distribución de una cantidad dada de producción entre diversas regiones” (Restrepo, 2001, p.3), que afecta a todos los agentes de la sociedad, causando altos costos pero también ganancias. Para Haavelmo (1954) el conflicto culmina solo cuando esta alternativa deja de ser rentable, comparada con actividades productivas lícitas.

Pero la “Economía del crimen”, como se le llamó al anterior enfoque, no introdujo en el análisis del conflicto el uso de las armas con fines políticos. Es Thomas Schelling (1960, 1966, 1967, 1984 y 1989), premio Nobel de Economía en 2005, quien hace referencia directa al uso de las armas como medio para extraer rentas de las actividades tanto legales como ilegales. En este sentido, Schelling (1960) muestra que tanto los agentes legales como los ilegales utilizan las armas: los primeros, con el fin de mantener el monopolio de la fuerza o la coerción; los segundos, las organizaciones criminales, con el objetivo de reducir costos (inversión en violencia) y maximizar rentas, al igual que las demás organizaciones económicas. Posteriormente, Schelling (1966) introduce el análisis sobre el conflicto armado interno:

1 En la década de 1960 apareció en la economía un grupo de teóricos e investigadores llamados economistas del crimen, que utilizando el modelo neoclásico de elección racional aplicaron este al análisis de un particular tipo de conflicto. El conflicto se presenta entre los civiles por la defensa de los derechos de propiedad y actúan diferente a las normas legales. El más importante de estos teóricos es el Nobel de Economía Gary Becker (1968), quien elaboró un modelo sencillo de comportamiento racional de los agentes que dividen sus actividades diarias en dos: unas legales y otras ilegales; además, presentó diferentes sistemas punitivos y diversos costos de oportunidad. Becker, utilizando el análisis neoclásico de agentes racionales y tomadores de decisiones, coloca a estos a tomar decisiones en ambientes donde es posible el crimen. Los agentes racionales hacen cálculos matemáticos y finalmente toman decisiones (Restrepo, 2001).

presenta el conflicto como una lucha por subvertir el orden institucional establecido y tomarse el poder. Ve a los subversivos como agentes que intentan establecer un orden institucional diferente, aumentar su poder y favorecer sus intereses y utilizan para ello las armas. Los rebeldes expanden su poder mediante las armas y estas le ayudan a apropiarse de los recursos producidos que son depredados por ellos (Schelling, 1960; Restrepo, 2001).

Posterior a Schelling son muchos los investigadores que desde la economía han realizado esfuerzos por estudiar los conflictos armados internos.² Todos ellos se pueden agrupar, para simplificar la diversidad de perspectivas teóricas, en dos enfoques: los que enfatizan en la identificación de los agentes, sus comportamientos y los incentivos que tienen para utilizar las armas; y los que analizan en los costos económicos y sociales que tiene el conflicto para los agentes implicados en él. Es decir, aquellos trabajos que analizan el conflicto con el comportamiento racional de los agentes y la búsqueda de riqueza (recursos naturales por ejemplo); y aquellos que asocian el conflicto con el deterioro de la economía, las instituciones, el PIB, etc. El primer grupo, que podría denominársele microeconómico (Martínez, 2001, p. 19), se caracteriza por presentar el conflicto como un juego entre actores racionales, que incorporan en sus decisiones elementos de incertidumbre, probabilidad, estrategias de juego, soluciones óptimas y otra serie de

aspectos en sus acciones indebidas con el fin de obtener ganancias.

Un ejemplo de este tipo de análisis es el trabajo de Kenneth Arrow (1963), que partiendo de agentes racionales y egoístas, coloca las fallas institucionales como el origen de los conflictos; estas acciones indebidas aparecen cuando se hace imposible agrupar preferencias y es necesario tomar decisiones sociales (Esteban y Raj, 1999). También esta Gordon Tullock (1967 y 1980) que analiza el conflicto desde la teoría de juegos; el conflicto aparece cuando cada jugador actúa de forma no cooperativa con el fin de obtener premios, pero ante la ausencia de instituciones los resultados dependerán de los recursos ofensivos (tecnología militar) que cada jugador haga. En esta misma perspectiva de análisis están los trabajos de Nitzan (1991), Hirshleifer (1988a, 1988b, 1990, 1995 y 2001), Baumol (1990), Grossman (1991, 1994a, 1994b, 1995, 1999, 2000a y 2000b), Grossman y Kim (2000), McGuire y Olson (1996), Skaperdas (1992), Skaperdas y Syropoulos (1996 y 1995), Garfinkel y Skaperdas (2000).

El segundo grupo, de corte macroeconómico, pone el énfasis en los efectos del conflicto. Su interés es mostrar los costos del conflicto, tanto económicos como sociales. Pues, efectivamente, los conflictos tienen efectos negativos en la eficiencia, en la productividad, en la acumulación de capital (físico, humano, financiero, natural,

2 Cabe destacar también los esfuerzos que autores como Tilly (1971 y 1985), Olson (1993), Heyman (1999), Giddens (1987), Moore (2000), Word (2000) y Hobsbawm (2001) han hecho desde la historia, la sociología y la ciencia política, por analizar los conflictos y su relación con la economía, aunque enfatizando menos en el componente económico.

e incluso social) y en la mayoría de variables económicas (Echeverri, Salazar y Navas, 2001). Su opuesto, la paz, trae una menor depredación de los recursos, un aumento del capital y de las inversiones, un crecimiento económico y un desarrollo social (dividendo de la paz).³ El conflicto cambia la estructura productiva, aleja inversiones en las actividades intensivas en capital, concentra las industrias en la ciudades, agravando la inequidad entre regiones (Restrepo, 2001 y Martínez, 2001). Un ejemplo de este tipo de enfoque es el de Kenneth Boulding (1962), quien argumentó sobre los efectos negativos que tiene para la actividad productiva el conflicto. También están los trabajos recientes del Banco Mundial, con autores como Collier y Hoeffle (1999 y 2001) y Collier (1998, 1999, 2000, 2001, 2004 y 2005), que enfatizan en los efectos macroeconómicos, ambientales, sociales y políticos de los conflictos.

La intención en las dos siguientes secciones es hacer una síntesis de algunos de los trabajos más significativos que se han realizado en Colombia sobre el conflicto interno armado, utilizando estos dos enfoques metodológicos. Pero, hay que advertir que en la literatura colombiana los trabajos sobre el segundo enfoque son escasos; los avances para medir los costos económicos y sociales del conflicto se reducen, por ejemplo, a realizar correlaciones entre crecimiento económico y violencia homicida o a comparar el crecimiento económico entre países con conflicto interno y sin él; dando como resultado conclusiones no

definitivas e, incluso, contradictorias, pues no se logra un consenso en el cálculo de los costos reales. Por ello se hace necesario, en la tercera parte, echar mano de los estudios internacionales que han intentado medir los costos económicos y sociales en países con conflicto, a fin de proponer hipótesis de trabajo para los economistas nacionales y poder, en un futuro próximo, lograr determinar los graves efectos que tiene el conflicto armado interno en Colombia, en variables como el crecimiento del PIB, la inversión y la pobreza, entre otras; pero también poder sopesar los aportes que la economía de la guerra tiene en estas mismas variables.

II. Actores, comportamientos y recursos en el conflicto colombiano

Como se dijo al inicio, los estudios económicos sobre el conflicto armado interno colombiano son recientes. Desde antes de la década de 1980 en Colombia era común encontrar estudios de otras disciplinas sobre este fenómeno, pero muy escasos desde la perspectiva económica.⁴ Sin embargo, dada la importancia que cada vez fue adquiriendo el componente económico en el conflicto, a los instrumentos metodológicos que fue desarrollando la economía y al reconocimiento social y científico que se le dio a esta disciplina, durante el primer lustro de la década de 1990 comenzaron a aparecer una serie de trabajos que iniciaron la discusión de este

3 Es necesario decir que en tiempos de paz también pueden haber fenómenos sociales y políticos conflictivos, que no están asociados necesariamente al conflicto armado interno, como las protestas, motines, golpes de Estado y revueltas, entre otros, que pueden también afectar las variables económicas.

fenómeno en la economía (Posada (1994), Montenegro y Posada (1995), Gaitán (1995) y Rubio (1998 y 1999)).

Pero fue la relevancia del componente económico, después de la década de 1980, lo que hizo que definitivamente se incluyera este elemento en el análisis del conflicto. Según Gutiérrez y Sánchez (2006), el conflicto armado interno perdió el componente netamente político que lo caracterizaba antes de 1990;⁵ ahora Colombia está ante un conflicto “más económico, más criminal y más político” (2006, p. 17). Una idea apoyada por Ramírez (2006) y Pizarro (2004), para quienes el conflicto interno armado ha dado un gran giro en la década reciente: antes, las armas se utilizaban con el fin de resolver problemas políticos, ideológicamente comunistas, respaldados por el gobierno norteamericano (Guerra Fría); ahora, desde comienzos del decenio de 1990, el uso de las armas tiene un fin económico, además del político.

Los grupos armados colombianos, después de la década de 1980, han dado un viraje en los objetivos políticos de largo plazo. El objetivo de tomar el poder político

ha sido matizado, su objetivo actual es la consolidación de su poder político en zonas con recursos naturales importantes y riquezas (Richani, 2003a, p. 130). Además, el comercio de las drogas ilícitas se ha convertido en el principal combustible del conflicto.⁶ Esta situación se inscribe en la hipótesis, algo simplista pero sugestiva, de las *Nuevas Guerras*, que presentan el conflicto mundial como un híbrido entre violencia política y crimen organizado, como una economía de guerra sustentada por la disputa de recursos financieros, territoriales y humanos (Kaldor (2001) y Munkler (2004)). Ven la violencia como otra opción que tienen los “señores de la guerra” para maximizar las ganancias, hasta el punto en que se pone como práctica normal al lado de otros métodos legales económicos (Elwert, 2003, p. 12).

A. Actores y comportamientos

El conflicto armado interno ha tenido grandes giros en la historia reciente del país. Antes de la década de 1980 los implicados en el conflicto eran tan solo la guerrilla (varias agrupaciones) y el Estado, y su accionar era en zonas marginales.⁷ Pero,

4 Un ejemplo es el famoso estudio sobre la violencia realizado en la segunda mitad de la década de 1980 por la “Comisión de Estudios sobre la Violencia”, y aunque mostró el giro hacia lo económico que se estaba dando en Colombia a la violencia continuó enfatizando en el componente político.

5 El informe *Colombia, violencia y democracia*, de 1987, atribuyeron el surgimiento del conflicto interno colombiano al cierre del sistema político; sin embargo, esta idea puede ser contradictoria, pues el conflicto continuó e incluso se profundizó con la transformación que generó la Constitución Política de 1991. Para las Naciones Unidas el conflicto interno colombiano es marginal, pues según Hernando Gómez Buendía, que coordinó el Informe Anual en 1993 llamado *El conflicto: callejón con salida*, ni la guerrilla ni el Estado han podido sacar el conflicto de la periferia en que se encuentra.

6 Un ejemplo claro es la guerrilla de las Farc-ep que ha adoptado nuevas formas de financiamiento, pasando del secuestro y la extorsión al control de la producción de drogas ilícitas; actividades de financiación muy rentables que han permitido aumentar su poder bélico.

7 Los grupos armados ilegales incursionaban en regiones de colonización, alejadas de los centros económicos del país, en las cuales se podía establecer una relación entre pobreza y ausencia esmalta y presencia guerrillera (Pizarro, 2004)

llegada la década de 1980, la geografía de la guerra cambió, los grupos guerrilleros se expandieron y surgieron otra serie de actores que imprimieron otra dinámica al conflicto. La aparición de un nuevo actor como el paramilitarismo, la profundización del crimen organizado y el fortalecimiento del narcotráfico le imprimen un tinte nuevo al conflicto, más complejo y problemático. Tanto el paramilitarismo como el narcotráfico y los empresarios ilegales, se convierten en nuevos actores armados que han venido a “retar” al Estado. Teniendo como uno de sus mayores motivos los recursos provenientes de los cultivos ilícitos; estos se han convertido en máquinas de dinero que ayuda a financiar la guerra.

Esta compleja y dinámica situación del conflicto colombiano ha sido estudiada por los economistas, que siguiendo los modelos propuestos por la microeconomía y utilizando la teoría de juegos, muestran el conflicto como un “juego bélico”, con actores racionales, en expansión (dinámico) y cuyo motor es la lucha por recursos. En este enfoque, además del Estado y la guerrilla, son introducidos otros jugadores al conflicto (campesinos, paramilitares, narcotráfico e, incluso, otros países). La mayoría de estos trabajos se basan en los modelos propuestos por Grossman (1991 y 1999)⁸ y Colliery Hoeffler (1998) y aunque

logran resultados analíticos importantes, se puede decir que estos son algo simplificados y reduccionistas.

Estos análisis ven el origen del conflicto en factores netamente económicos, donde los agentes racionales calculan costos y beneficios, y toman las decisiones que más les conviene. Los modelos microeconómicos presentan el conflicto armado interno colombiano como un juego entre agentes en competencia, que poseen información (completa o incompleta), analizan las actuaciones de sus contendores, calculan probabilidad de ganancia (cálculos basados en fuerzas en hombres y armas) e introducen el riesgo y la incertidumbre en sus decisiones; finalmente encuentra su punto de equilibrio. Ejemplos de este tipo de enfoque son los trabajos de Isaza y Campos (2005) y Gorbaneff y Jácome (2000) que presentan un modelo económico para analizar el fenómeno de la insurgencia armada en Colombia.

Gorbaneff y Jácome (2000) explican la insurgencia como una actividad económica racional, al margen de la ley, que existe por que y hasta que los beneficios superan los costos. En estos juegos participa el gobierno, quien determina el gasto militar óptimo (soldados que hay que pagarles un salario); la insurgencia, quien toma decisiones como un empresario racional; y, finalmente, las familias que toman la decisión que más les

8 Grossman (1999) presenta un detallado estudio en el cual se desarrolla una teoría económica de la revolución como manifestación de la rivalidad. En este modelo se argumenta que la posibilidad de ocurrencia de la revolución depende de factores estocásticos, por ejemplo, la habilidad del líder revolucionario. Se proponen tres jugadores: gobierno, líder revolucionario y pueblo. El gobierno y el líder revolucionario se presentan en competición para obtener el derecho de explotar a la población. Finalmente, el modelo presenta una estimación del gasto militar necesario para disuadir a potenciales líderes insurgentes de iniciar una revolución.

conviene (entre producción económica legal, servicio militar, producción casera de subsistencia e insurgencia). En esta misma línea, y convirtiéndose en uno de los trabajos más apropiados, esta la investigación de Salazar y Castillo (2001). Este trabajo propone algunos patrones que podrían ayudar a explicar el desarrollo y expansión del conflicto armado como producto, no de las conductas irracionales o de predisposición cultural a la violencia, sino como “el resultado banal de la acción racional de los agentes armados y no armados que han aprendido a sobrevivir en condiciones de extrema incertidumbre, escasa solidaridad y falta de reglas transparentes para conducir las relaciones entre los individuos y entre éstos y los distintos grupos sociales (p. 11).

La diferencia de Salazar y Castillo (2001) con los estudios tradicionales sobre la violencia en Colombia es que no centran su análisis en las causas u orígenes del conflicto, ni en las lógicas de acción de los agentes del conflicto, sino que buscan entender el conflicto armado colombiano desde el punto de vista de las conductas estratégicas de sus protagonistas. El análisis de los actores del conflicto se hace pensando en que las decisiones de cada uno de los agentes dependen en forma crucial de lo que los otros agentes hagan, de las expectativas

de los demás agentes. Piensan a los grupos armados y no armados como agentes racionales que participan en un juego dinámico de largo plazo.⁹ Asumen que los agentes son racionales en la medida que muestran “una conducta consistente, que sigue unas metas definidas y trata de elegir unos cursos de acción apropiados para alcanzar esas metas” (p. 61). En este juego dinámico participan las Fuerzas Armadas regulares (el Estado), las organizaciones guerrilleras, los paramilitares y la población civil. Todos estos agentes racionales recurren a diversas formas de organización y conocimiento, basados en distintos modelos de recolección, procesamiento y transferencia de la información.

Con esto, Salazar y Castillo (2001), logran construir un modelo de interacción estratégica de teoría de juegos para explicar el conflicto armado colombiano actual, destacando las estrategias de los distintos actores armados, sus percepciones mutuas, sus capacidades militares y políticas y los resultados probables de su interacción. Al final el modelo muestra el conflicto como un enfrentamiento entre grupos armados que usan (en diversas intensidades y formas) una estrategia de amenaza y protección para incrementar su poder sobre la población civil. Paramilitares, guerrilla y Fuerzas Armadas extraen tributación económica de

9 Los autores consideran al conflicto colombiano como “un conflicto con agentes muy racionales”. Salazar y Castillo describen la violencia colombiana como “calculada, funcional y económica en su racionalidad. No responde al fanatismo político, religioso o étnico” (p. 26). Sin embargo advierten que no es la racionalidad clásica o perfecta racionalidad de los libros y teorías ortodoxas sino de “una racionalidad mas limitada (...) agentes con información incompleta forman unas ciertas aspiraciones que ellos consideran alcanzables dadas las circunstancias inciertas en las que se encuentran. Hemos supuestos dos aspiraciones básicas: la supervivencia y la ampliación de las oportunidades económicas” (p. 27).

la población civil a cambio de protección con respecto a su propia amenaza y a la de otros agentes involucrados en el conflicto (p. 105).

La conclusión de Salazar y Castillo (2001) es que la violencia política colombiana ha producido un efecto bastante duradero, “el vasto paso de riquezas y propiedades de una mano a otras, y sus consecuencias más evidentes: el surgimiento de economías de exportación, la consolidación de nuevos sectores económicos, la generación de nuevas formas de ganar, asegurar y defender la riqueza” (p. 12). Pero esto último no es lo más importante, “lo decisivo fue la consolidación de métodos usados en ese período como formas permanentes de obtener propiedades y acumular riquezas y controlar en forma efectiva a la población civil” (p. 15). El resultado es un “sistema económico y social excluyente, y sin ninguna capacidad de auto regulación, de la falta de monopolio de las armas por parte del Estado en vastas zonas del país (en lo urbano y en lo rural, en el centro y en las márgenes), y de la ausencia de reglas claras y transparentes para dirimir los conflictos entre los ciudadanos y de los mecanismos para asegurar su cumplimiento y observación” (p. 28).

Para finalizar, y a modo de balance, cabe reconocer la importancia que tienen los trabajos publicados en Colombia bajo la perspectiva microeconómica sobre el conflicto armado interno. Estos han logrado mostrar el poder analítico y conclusivo que poseen los modelos provenientes de la teoría de juegos; pero también lo simplificados

que pueden llegar a ser, pues reducen el conflicto a una cuantas variables y consideran el comportamiento de los agentes como iguales (la guerrilla, por ejemplo, es una y se comporta como un agente representativo). A pesar de ello se espera que en poco tiempo comiencen a utilizarse modelos más sofisticados y dinámicos, que incluyan más actores, variables y comportamientos, ya que los desarrollos que la teoría de juego está logrando son sorprendentes y podrían ser un muy buen aporte de la economía al análisis del conflicto colombiano.

B. Recursos e incentivos del conflicto

En la literatura son muchos los estudios que se han realizado para analizar las causas y el progresivo aumento del conflicto colombiano (políticos, sociológicos, jurídicos, históricos, etc.). Desde la perspectiva económica estos no son tantos; los pocos que se tienen han enfatizado, o bien, en la precariedad del Estado y de las zonas en conflicto, especialmente en las áreas rurales; o bien, en la lucha por los recursos naturales, asocian el conflicto a la zonas de gran actividad económica y a los municipios urbanizados (Salazar (2005), Bottia (2003), Rubio (2002) y Echandía (1999)). Esta última posición es la que mayor apoyo ha tenido. Pizarro (2004), por ejemplo, defiende la idea que “la expansión de los grupos guerrilleros en la última década está relacionada directamente con el control de los polos de producción de diversas riquezas: áreas de producción y procesamiento de drogas ilícitas, zonas ricas en oro, carbón, petróleo, banano, ganadería y café” (p. 185).¹⁰ Esto le ha permitido a los actores

10 Esta idea es defendida en el contexto internacional por Buhaug y Gates (2002) que correlacionan conflicto armado con las regiones donde existen abundantes recursos naturales y gran potencial económico.

en conflicto, según Kalulambi (2003, pp. 82-83), lograr independencia financiera e impedir a los otros bandos tener accesos a estos recursos.

También está, en esta misma línea, Rangel (1997) quien ve a los grupos armados como agentes que buscan apropiarse del excedente económico por medio de amenazas en distintas capas de la población, sobre todo de altos ingresos, y que han encontrado básicamente tres formas de hacerlo: 1) el predatorio, que se caracteriza por los secuestros debido a la poca influencia de la guerrilla en una zona determinada; 2) el parasitario, representado en vacunas y boleteos, debido a una mayor presencia y “aceptación” por parte de la sociedad, que admite la extorsión constante; 3) el simbiótico, que se caracteriza por una inserción en la economía regional, tomando como principales fuentes de ingresos los cultivos ilícitos, la extracción de oro, extorsión a la explotación de recursos minerales y la apropiación de dominios ganaderos.

Un giro reciente y bastante sugestivo lo hacen Ortiz (2001), Restrepo B. (2001) y Sánchez y Chacón (2006), que avanzando por el lado de la explicación de los recursos, muestran que el crecimiento de la violencia está asociada al proceso de descentralización que se vive en Colombia desde mediados de la década de 1980. Para Sánchez y Chacón (2006), por ejemplo, la descentralización “al tiempo que redujo el papel de las llamadas “condiciones objetivas” del conflicto, al permitir un avance sin precedentes de los indicadores sociales, facilitó la labor de los grupos irregulares, al permitirles nuevas

oportunidades de control territorial y de recursos de financiación” (p. 369); lo cual fue posible gracias a la descentralización. Según las cifras del gobierno, durante el período 1982-2002, las transferencias aumentaron de forma vertiginosa: al pasar del 1,9% del PIB al 6% para estos años. Las transferencias municipales pasaron del 0,5% al 3,1% del PIB, superando las transferencias departamentales. De esta forma, los municipios colombianos pasaron a manejar cuantiosos recursos, que según Sánchez y Chacón (2006) “se hicieron tremendamente atractivos como fuente de financiación de los grupos irregulares” (p. 372), generando, lo que Rangel (1997) ha llamado, un *clientelismo armado*, que se expresa en la apropiación por parte de estos grupos de bienes y recursos públicos a través del uso de la violencia.

Otra explicación es la de Camacho (2003), que le da un enfoque socioeconómico y de derechos de propiedad al origen y continuidad del conflicto. Para este autor el problema del conflicto colombiano se encuentra en el “largamente larvado problema de la inequitativa distribución de la tierra y el fracaso consuetudinario del Estado colombiano en su solución” (p. 12). Todas las reformas agrarias que en Colombia se han realizado desde el presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) hasta la de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) no han afectado las bases del poder y privilegios de los grandes propietarios de tierras.¹¹ Esta idea es defendida por Richani (2003b) quien ve el origen de un grupo armado como las Farc-ep en las luchas campesinas

11 Las principales leyes que en Colombia han tratado de realizar una reforma agraria son la ley 200 de 1936, la 100 de 1944 y la 135 de 1961.

por el acceso a la tierra. Sin embargo, el mismo Richani (2003b) argumenta que son otras las razones que hoy se tienen para continuar en el conflicto: “la precariedad o el fracaso de los dispositivos institucionales adecuados para la tramitación de conflictos; las perspectivas de éxito de las partes, representadas en un economía política positiva, es decir, la conjunción de activos que hacen que la guerra sea la mejor opción disponible frente a los costos de la paz; y el establecimiento de un equilibrio de fuerzas entre los contendores, lo que construye a un cómodo *impasse*” (Camacho, 2003, pp. 11-12).

Finalmente, una idea que ha sido discutida en Colombia desde un enfoque económico es la del Banco Mundial, a través de los estudios de Rufin y Jean (1996) y Collier y Hoeffler (2001). Esta enfatiza en el giro económico que han tenido los conflictos mundiales después de la Caída del Muro y del fin de la Guerra Fría, el financiamiento de las guerras ha cambiado y la ayuda internacional que los grupos armados recibían ha cesado. En este nuevo ambiente la dinámica de las guerras depende en gran parte de los recursos internos con que cuentan los grupos armados. La evidencia de esta idea son las guerrillas de las Farc-ep y del ELN, para quienes la mayoría de sus recursos provenían, antes de 1990, de la capacidad de extorsión y apropiación de recursos internos; pero después de esta fecha la situación ha cambiado, particularmente para la Farc-ep, ahora el secuestro y el tráfico de drogas se han convertido en

las dos actividades delictivas que atraen mayores recursos para la guerra.

La conclusión de Collier y Hoeffler (2001, 2004 y 2005) es que la economía de las drogas explica la prolongación en el tiempo y la agudización del conflicto.¹² Una idea que, aunque fuerte, tiene mucho de cierto, pues la evidencia muestra que cada grupo armado ha seguido, después de la década de 1990, unos lineamientos estratégicos que le han permitido financiar sus actividades bélicas, aumentando su poder y acumulando y concentrando riquezas. Pero no todos lo han hecho desde la economía de las drogas, cada grupo ha tenido distintas dinámicas de expansión temporal y geográfica, que hacen imposible reducir el análisis a solo la economía de la droga. Si bien es cierto, advierte Rojas (2006), que las guerras necesitan recursos para sobrevivir y fortalecerse, éstas no existen solo porque hallan recursos para realizarse. No se trata de una guerra de depredación, solo por el control de recursos económicos, “los grupos armados siguen teniendo motivaciones políticas, por muy polémicas e incomprensibles que a veces resulte. Además la economía de la droga no es la única que sustenta el conflicto armado” (Rojas, 2006, p. 61).

A pesar de la advertencia de Rojas (2006), lo cierto es que el ejército rebelde o guerrilla colombiana ha dado un giro a la fuente de sus finanzas con el fin de mantenerse (Pizarro, 2006). La guerrilla de las Farc-ep, por ejemplo, ha logrado acumular un capital suficiente que le ha permitido el

12 Una crítica a esta posición la hace Rojas (2006) pues el reducir el conflicto a un búsqueda solo de ganancia conseguida con las drogas ilícitas, puede producir “errores en la estrategia y a procesos fallidos de negociación” (Rojas, 2006, p. 57). Problemas como la exclusión política, la desigualdad social y la pobreza también deben tenerse en cuenta en los análisis económicos.

mantenimiento de un aparato militar que llega a tener más de 17.000 hombres en armas y, por ende, a una frondosa red de colaboradores: “suponiendo que las FARC sean una organización burocráticamente muy eficiente, como mínimo la relación es de 4:1, es decir, un combatiente por cuatro no combatientes dedicados a tareas de apoyo: médicos, enfermeras, odontólogos, transportista, armeros, contadores, etc. Se podría deducir, por lo tanto, que la familia Farc-ep llegó a estar compuesta al menos por unas setenta mil personas” (p. 190).

Y es que según Vélez (2000) y Rangel (2001), la guerrilla de las Farc-ep le ha

dado un inteligente manejo a los recursos provenientes de los cultivos de coca. Estos, se supone, han crecido considerablemente, si se mira la dinámica de las hectáreas cultivadas en Colombia en el período 1991-2003 (Cuadro 1). Además, los ataques a la infraestructura física, los secuestros y las amenazas a sectores productivos les han permitido aumentar sus recursos y, con ello, aumentado la dotación de equipo bélico y capacitación de los integrantes (Vélez, 2000). Pasando, según Rangel (2001), de tener 7 frentes y 850 hombres en 1978, a más de 16.000 hombres repartidos en 66 frentes en 2000.

Cuadro 1
Colombia: cultivo de coca, 1991-2003

Año	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003
Hectáreas	37.500	39.700	50.900	79.400	160.100	144.800	86.300

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). *Colombia Coca Cultivation Survey for 2003*, citado por Rojas, 2006, p. 66.

La expansión que ha tenido las Farc-ep se debe, según Salazar (2005), a varias razones, siendo una de las principales las fuentes de financiación estables y cuantiosas, como la depredación de actividades productivas, la explotación de recursos naturales (petróleo, carbón, oro, etc.), el boleteo y extorsión a sectores productivos (manufacturera, energía, transporte, etc.), el desangre de las finanzas municipales (por extorsión directa o desvío de la inversión local), el secuestro de personas y el narcotráfico (Cuadro 2).

De la misma manera, en regiones donde se produce drogas ilícitas, las Farc-ep establecieron un sistema tributario que abarca todos los ámbitos (cultivos, procesamiento y tráfico) (Sánchez y Chacón, 2006, p. 358).¹³ Para Richani (2003b, p. 128), la guerrilla ha dado un manejo estratégico a sus inversiones locales e internacionales a través de la formación de recursos humanos y aumento de la capacidad tecnocrática permitiendo un manejo apropiado de inversiones y capitales.

13 En el Cuadro 2 se aprecia como los recursos que provienen del narcotráfico financian a los grupos insurgentes en un 41.9%, representando cerca de \$204 millones de dólares anuales, seguidos de la extorsión y el secuestro que representan un 53.6% (\$261 millones de dólares). Por otra parte, el gobierno nacional estima que los ingresos anuales de los paramilitares alcanzan \$286 millones de dólares (a precios de 2003), de los cuales el 70% corresponden al tráfico de drogas (Pnud, 2003).

Cuadro 2
Colombia: ingresos estimados de la guerrilla, 2003
(Cifras en millones de dólares anuales)¹⁴

Fuentes	FARC-EP	ELN	Total aprox.	Porcentaje
Narcotráfico	204	(**)	204	41,9
Extorsión	96	59	155	31,8
Secuestro	32	74	106	21,8
Otros (*)	10	11	21	4,3
Total	342	144	486	100

(*) Otros: incluyen captura de fondos públicos, asalto a entidades, abigeato.

(**) Algunas estimaciones plantean que el narcotráfico puede llegar a representar el 8% de los ingresos del ELN. Sin embargo se sabe que este grupo es bastante reacio a participar en el negocio de las drogas.

Fuente: Pnud, *El conflicto, Callejón con salida*, 2003.

Una determinación muy distinta adoptó la guerrilla del ELN, quienes construyeron un proyecto político basado en el poder popular, insertándose en las zonas de influencia en la política local, vigilando el cumplimiento de los programas y planes de desarrollo local y regional, fiscalizando el manejo de los recursos públicos, luchando contra el clientelismo. Aunque, también, la fuente de recursos se encuentra en los secuestros, esta agrupación a pesar de su tamaño, comparado con el de las Farc-ep, es similar en el número de secuestros. Su estrategia de secuestro extorsivo le permitió contar con recursos para la guerra, al ser, según Peñate (1997), la primera organización guerrillera en utilizar, desarrollar y profundizar en los secuestros extorsivos. Logrando un crecimiento importante a lo largo de las décadas de 1980 y 1990: paso de “tener 350 hombres en armas y 4 frentes de guerra, en 1984, a tener 4.500

repartidos en 41 frentes, en el 2000, con lo cual se extiende su actividad armada sobre las diversas regiones del país” (Sánchez y Chacón, 2006, p. 360). Sin embargo, en el último periodo (después de 2000) el ELN ha visto minada su capacidad militar y sus zonas de influencia se han reducido, debido a presiones por parte de grupos paramilitares o de autodefensas y de las mismas Farc-ep.

En síntesis, el ELN ha tratado de sacarle partido a la descentralización administrativa y política que desde mediados de la década de 1980 se viene impulsando en el país. Estrategia política que le permitió un fortalecimiento político en las localidades, logrando, incluso, un mayor desarrollo militar.

Sin embargo, dicho crecimiento no fue tan sólido como se piensa y no significó una importante elevación de sus tasas de

14 Richani (2003, p. 130) hace una descripción muy detallada de los ingresos de las Farc-ep y del ELN entre 1994 y 1999, que complementan este Cuadro 2. Lo hace en millones de dólares y según origen de los recursos: secuestros-rescates, inversiones en minería, extorsión, impuesto de guerra (Ley 002), impuestos a pasta de coca y de amapola, etc.

combate. El grupo tendió a estancarse militarmente y a mantener su esquema guerrillero; mientras la Farc tuvo un crecimiento más destacado, elevaron su ofensiva e hicieron intentos más serios de reconvertirse en un ejército. Esa diferencia entre una y otra guerrilla no puede explicarse exclusivamente del narcotráfico; cuenta en el estancamiento del ELN tanto su organización interna como el que no se hallaba preparado ni para asumir el incremento de sus filas, ni para avanzar en los retos planteados por su estrategia político-militar (Aguilera, 2006, p. 235).

En cuanto a los paramilitares, que son el tercer agente estudiado de los grupos armados ilegales en Colombia, nacieron en la década de 1980 bajo la Presidencia de Belisario Betancur, tras los tropiezos de las políticas y de los diálogos de paz (Romero, 2002). En sus inicios fueron grupos de autodefensas patrocinados y financiados por propietarios de tierras que conformaban un ejército no superior a los 1.000 hombres. Rápidamente pasaron de la contención a la ofensiva, para comenzar a atribuirse funciones propias del Estado, librando batallas en contra de la guerrilla a la vez que asesinaban a líderes de izquierda y a los denominados “amigos de la guerrilla” (Cubides, 1999). Tras agruparse bajo un mismo mando, los paramilitares comienzan a nombrarse, en abril de 1996, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consolidándose como una organización contrainsurgente que incursionó en regiones tradicionalmente dominadas por la guerrilla, tal como Urabá (en Antioquia), Córdoba (al norte del país) y Meta y Putumayo (al sur del país), aspirando, a su vez, a que exista un frente de las autodefensas donde haya un frente guerrillero, tanto en el campo como en las

ciudades (Casto, Arabia y Celis (1999) y Cubides (1999)).

En la década de 1990 los paramilitares crecieron de forma exponencial, llegando, según cálculos del gobierno, en 2005 a tener cerca de 10.000 hombres en sus filas, dispersos en casi todo el territorio nacional, jugando un papel fundamental en la dinámica del conflicto armado interno colombiano, al tiempo que buscaban financiar sus actividades con aportes de terratenientes, ganaderos y contribuciones de empresarios urbanos a quienes ellos protegen. Al igual que los grupos guerrilleros, también obtienen recursos de los narcotraficantes a quienes a cambio les protegen sus cultivos ilícitos, además de incursionar en el negocio de drogas al desarrollar actividades en varios eslabones de la cadena (relacionadas con el cultivo, procesamiento y tráfico) (Casto, Arabia y Celis (1999)).

El resultado, a finales de la década de 1990, fue una expansión en todo el territorio nacional del paramilitarismo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2002, existían en Colombia 22 grupos paramilitares repartido en 28 departamentos. El número de hombres en armas de las AUC también ha crecido aceleradamente: pasaron de 3.800 en 1997 a 13.000 en 2003 (Sánchez y Chacón, 2006, p. 365). Este crecimiento se explica, en gran parte, por la estrategia adoptada de expandir sus frentes a todos los territorios donde la guerrilla ejerza control. Según Richani (2003b), la idea de las autodefensas es debilitar económicamente a los grupos guerrilleros, desplazándolos de las zonas con una gran potencia económica (Urabá, Putumayo, Sur de Bolívar, Barracabermeja y Cúcuta).

El resultado fue unas autodefensas fortalecidas, con control sobre poblaciones, recursos y corredores estratégicos de los distintos mercados ilegales. Atacaron los bastiones guerrilleros y zonas de influencia, reduciendo los ingresos de la guerrilla y fortaleciendo los suyos. Esto lo lograron realizando asesinatos selectivos y masacres, con el objetivo de eliminar el apoyo social de la guerrilla en aquellos sectores (Romero, 2002). De hecho, según Sánchez y Chacón (2006), “las AUC son el grupo que

más se ha visto involucrado en masacres y asesinatos selectivos” (p. 358). Entre 1997 y 2001, más de 70 masacres fueron atribuidas a estos grupos, algunas de ellas juzgadas (Cuadro 3), aumentando considerablemente el número de víctimas por la violencia política en el país (Cuadro 4). Además, el hecho de que los paramilitares hayan encontrado en el narcotráfico una forma de obtener recursos para la guerra, cambió su rumbo y mejoró las condiciones logísticas y de poderío militar.

Cuadro 3
Colombia: número de paramilitares capturados, 1995-2000

Año	Número de paramilitares capturados
1995	83
1996	105
1997	113
1998	152
1999	252
2000	383

Fuente: Vicepresidencia de la República de Colombia, citado por Gutiérrez y Barón, 2006, p. 270.

Cuadro 4
Colombia: violencia política letal (muertos), 1990-2004

Año	Fuera de combate	En combate	Total
1990	1.375	1.108	2.483
1991	1.147	1.125	2.272
1992	1.175	1.285	2.460
1993	783	806	1.589
1994	795	764	1.559
1995	766	645	1.411
1996	1.066	681	1.747
1997	1.250	610	1.860
1998	1.503	1.023	2.526
1999	1.523	1.060	2.583
2000	2.075	1.811	3.886
2001	2.094	1.967	4.061
2002	1.343	2.365	3.708
2003	1.204	2.299	3.503
2004	996	2.176	3.172
Total	27.936	25.495	53,431

Fuente: Gutiérrez y Barón, 2006

La conclusión de Gutiérrez y Barón (2006) es que los paramilitares colombianos están relacionados tanto con fuerzas intrasistémicas como con un tipo de criminalidad organizada que estaba en una (declarada) guerra contra el Estado: “estos aparecen como una fuerza punitiva, fundamentalmente de los ganaderos y narcotraficantes, pero pronto sus gestores descubrieron que necesitaban gobernar, lo que implicó el establecimiento de nuevos mecanismos para controlar la población” (p. 270). Cumpliéndose con ello la vieja tesis de Schelling (1966) de que hay orden social, incluso en situaciones de violencia y represión, pues los agentes, sobre los que se ejerce la violencia, trataran de evitar el dolor haciendo lo que los violentos les obliguen, con la intención de sobrevivir. Los pobladores de las zonas afectadas por la violencia “tratan de adaptarse y sobrevivir sea cual sea la sigla del ejército ilegal que domina la escena” (Gutiérrez y Barón, 2006, p. 270).

En el análisis del conflicto armado interno colombiano también está el Estado. Este actor igualmente es considerado por el enfoque económico como un agente con intereses y que se “beneficia” del conflicto que vive el país. Lo hace al verse autorizado por la sociedad para cobrar más impuestos, aumentar el gasto público en defensa y solicitar préstamos y ayudas internacionales para combatir los rebeldes o narcoguerrilla como la llama. El gobierno a sabido muy

bien aprovechar el giro que ha dado la historia reciente en la última década, logró convertir el problema de la insurgencia de un fenómeno netamente endógeno y nacional a una guerra con connotación internacional (de guerra contrainsurgente y guerra antinarcóticos) (Rojas, 2006). Es precisamente este giro a lo internacional el que le ha permitido al Estado colombiano conseguir nuevos recursos para financiarla el conflicto, contando con el apoyo político y financiero del exterior.¹⁵

Uno de los mayores aliados con que ha contado el Estado para hacerle frente al conflicto es Estados Unidos, primero, en la década de 1990, en la lucha contra guerrilla y antinarcóticos, y luego, después del 11 de septiembre de 2001 (11-S), la guerra antiterrorista (Cuadro 5). Desde hace más de veinte años Estados Unidos comenzó a mirar a Colombia como país con serios problemas de drogas ilícitas, convirtiéndose el tema de la guerrilla también en un problema para Washington (Bonilla (2004) y Forigua (2006)). El primer momento de intervención fue entre 1995 y 1998 donde participaba tímidamente, pero luego, entre 1999 y 2001, cuando “adopta una posición pública y abierta frente al conflicto armado” (Rojas, 2006, p. 46), al tiempo que se prepara con estrategias militares. Finalmente, después del 11-S se convierte la guerra antiguerrilla y antinarcóticos en “lucha contra el terrorismo”.¹⁶

15 La Richani (2003) la estructura militar tradicional, cargada de burocracia y con un alto poder político y económico fue una de las razones por las que el conflicto persiste y no se combate tajantemente a los grupos al margen de la ley.

16 Este giro hacia la lucha antiterrorismo hace que el conflicto colombiano se inscriba en lo que Kaldor (2001) y Munkler (2004) han llamado *Nuevas Guerras*, caracterizada por una desideologización del conflicto después de la caída del comunismo, así como en su identificación como una guerra por recursos económico generados en los flujos internacionales. Cambiando de una guerra local o regional a una desnacionalizada y global.

Cuadro 5
Montos de la asistencia entregada a Colombia en los años fiscales 2000-2004
(Cifras en millones de dólares)

Agencia/año	2000	2001	2002	2003	2004	Total
Estate Department	774,9	48	275,4	516,6	495,8	2.110,7
Department of Justice	123,5	0	104,5	122,2	122,2	472,4
Department of Defense	128,5	190,2	119,1	165	122,0	724,8
Total	1.026,9	238,2	499,0	803,8	740,0	3.307,9

Fuente: Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento de Defensa y el Congressional Research Service (GAO D04726). Citado por Rojas, 2006. p. 69.

Pero la ayuda para el gobierno colombiano no solo procede de Estados Unidos, la Unión Europea también le ha brindado recursos para atender el conflicto. Sin embargo, lo hace desde una perspectiva muy distinta a la ofrecida por Estados Unidos con el Plan Colombia. La Unión Europea considera que el Plan no tiene beneficios reales para el pueblo colombiano (González (2001) y Roy (2001). Por ello, su decisión fue la de “apoyar al desarrollo social y económico, impulso a los cultivos alternativos, estímulos a reformas administrativas y judiciales y promoción de los derechos humanos, además, prometió recursos por 105 millones de euros durante el periodo 2000-2006” (Ramírez, 2006, p. 85). Convirtiéndose la promoción y la defensa de los derechos humanos, la reducción de las diferencias socioeconómicas y el refuerzo institucional en las tres áreas prioritarias para la Unión Europea (*European Commission*, 2000). Su apoyo financiero ha sido a los diferentes entes comunitarios,

población desplazada y laboratorios de paz (Cuadro 6).¹⁷ Pudiendo este apoyo resultar un respiro para el gobierno, pues los recursos que deja de invertir allí lo pueden hacer en el conflicto.

Finalmente, está el sector formal de la economía, que a pesar de lo contradictorio que parezca se ha beneficiado con el conflicto. Un ejemplo son las industrias dedicadas a las labores asociadas al conflicto, como las empresas de vigilancia privada (Ospina, 1996). En Colombia estas empresas han crecido ostensiblemente: las cifras en término de diez años así lo confirman, pasó de tener cerca de 50.000 efectivos en 1991, que representaban el 0.56% del PIB, a tener más de 126.000 en 2001, lo que aumenta a un 1.14% del PIB. Esto mismo pasó con la seguridad pública: las fuerzas policiales que para 2001 tenía en sus filas 90.886, con unos gastos de \$2.1 billones de pesos (1.14% del PIB), equivalentes a cerca de la mitad del presupuesto militar para ese año (Cuartas, 2004) (Cuadro 7).

17 Las pretensiones de la Unión Europea han sido las de suministrar a Colombia un apoyo político que permita que la tarea de lograr una paz duradera sea posible. Su ayuda esta dirigida a solucionar problemas sociales y económicos y no militarmente como lo sugiere Norteamérica. Para los europeos el conflicto colombiano debe ser solucionado por los mismos colombianos, por ello no dudan en criticar el Plan por el marcado tinte militar que tiene, y en el cual se dejan de lado la implicación de los diversos bandos en disputa, la carencia de tratamiento de los temas de derechos humanos, la reforma agraria y los problemas de impuestos.

Cuadro 6
Colombia: ayuda de la Unión Europea comprometida para 2000-2006
(Montos en Euros)

Destino de los recursos	Monto
Desarrollo social y económico contra la pobreza	40.000.000
Desarrollo alternativo en zonas de cultivos ilícitos	30.000.000
Reformas administrativas y judiciales	25.000.000
Promoción de defensa y derechos humanos	10.000.000
Total	105.000.000

Fuente: Ramírez, 2006, con base en información de Paris Rojas, 2002.

Cuadro 7
Colombia: crecimiento de la industria de vigilancia privada, 1991-2001

Año	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Personal Vigilancia	48.777	53.655	59.020	64.922	71.414	78.556	86.411	95.052	104.558	115.013	126.515
% PIB	0,56	0,64	0,69	0,74	0,80	0,82	0,85	0,91	1,04	1,09	1,14

Fuente: PNUD, El Conflicto, Callejón con Salida, (2003), citado por Cuartas, 2004, p. 31.

En resumen, la evidencia muestra que en Colombia hacer la guerra cuesta, pero también deja grandes ganancias y permite acumular riquezas. La posición de la economía es que el conflicto colombiano pudo haber tenido diversas razones para su surgimiento, pero llegada la década de 1990 la dinámica de los actores cambió. Los diversos grupos, incluyendo el Estado, han cambiado sus estrategias para sobrevivir o aumentar su poder, han visto en el mercado de las drogas ilícitas, en la expropiación de tierras, en el secuestro y la extorsión y en las ayudas internacionales fuentes de recursos para continuar en esta dinámica. Confirmando de nuevo la hipótesis que mientras haya incentivos (monetarios, de poder o de impunidad) para continuar en el conflicto este no tendrá fin.

III. Los costos económicos y sociales del conflicto

Históricamente Colombia ha sido la excepción en América Latina: desde 1940

hasta 1990 el país fue ejemplo en manejo macroeconómico, una de las economías más sólidas del continente, incluso capaz de pasar sin muchos tropiezos por las crisis de las décadas de 1970 y 1980 de los países latinoamericanos; esto lo llevó a ser conocido como el “país sin quiebras y sin milagros económicos” (Richani, 2003b, p. 21). Sin embargo, a partir de 1990 la percepción que se tiene del país es otra, se considera una nación problemática, con una economía política compleja y muy diferente a las demás. A pesar de ser en la actualidad el cuarto país en tamaño poblacional en América Latina y el quinto en producto interno bruto, es reconocida también por ser uno de los países más violentos del mundo, reflejado en las altas tasas de homicidio (una tasa para 2000 de 63,7 homicidios por cada 100 mil habitantes) y de violencia letal (en la última década la violencia ha causado más de 350 mil muertes y el desplazamiento interno de aproximadamente dos millones de habitantes) (Richani, 2003b).

En este sentido, el conflicto armado interno se ha convertido en un fenómeno cada vez más importante para la economía. Su proceso ha desencadenado un prolongando proceso de desarrollo en orden inverso, que viene retardando el desarrollo, destruyendo la economía, causando altas ineficiencias debido a los costos económicos y aumentando la pobreza y el subdesarrollo (Echeverri, Salazar y Navas, 2000). Lo paradójico es que, a pesar de esta reconocida importancia teórica, los efectos que causa el conflicto en la economía colombiana aun están por calcular. Así lo deja consignado Gómez en 2001 que, tratando de hacer un balance de los intentos por medir los efectos que tiene el conflicto en el crecimiento económico, mostró que los trabajos que en Colombia se han realizado para calcular los efectos no son contundentes y “arrojan resultados cuando menos contradictorios” (p. 53).

La afirmación de Gómez (2001) queda ratificada con tres trabajos que se realizaron a principios de esta década buscando calcular los costos del conflicto: 1) Para Cárdenas (2000) la violencia “explicaría como máximo la pérdida de medio punto porcentual del PIB por año” (Gómez, 2001, p. 53). 2) Echeverri, Salazar y Navas (2000) estiman que el impacto de la violencia es marginal. 3) los cálculos del Departamento Nacional de Planeación es de dos puntos del PIB por año, equivalentes a 1.800 millones de dólares anuales. Estos ejemplos evidencian la situación crítica en la que se encuentra la investigación económica colombiana sobre el conflicto, ya que existen dificultades metodológicas para medir el

efecto real del conflicto e incluso de otros tipos de violencia sobre el crecimiento económico. Pues “ni la tasa de crecimiento de los períodos de relativa paz, (...) ni el desempeño de los países vecinos, pueden considerarse como medidas aproximadas del crecimiento potencial de la economía colombiana en un hipotético escenario de paz” (Gómez, 2001, p. 53).¹⁸

Ante esta dificultad y teniendo necesidad de hacer aproximaciones a los efectos negativos que tiene el conflicto en la economía, se podría iluminar el camino a través de los estudios que en otros países se han realizado para hacer una tarea similar. En este caso estudios del Banco Mundial y otros estudios internacionales podrían dar luces para realizar una aproximación y mostrar posibles caminos para medir el impacto del conflicto en las variables económicas del país. Un ejemplo es Collier (2004), que mostró que “para cuando una guerra civil típica llega a su fin, los ingresos muestran una disminución cercana al 15% de lo que habrían sido de otra manera, implicando que aproximadamente 30% más de las personas están viviendo en la pobreza absoluta” (p. xx). La pregunta para los investigadores colombianos sería: ¿pasa lo mismo con el ingreso de la población colombiana en medio del conflicto? Igualmente, según estimativos del Banco Mundial, los países con guerras civiles producen una reducción cercana al 2.2% en el crecimiento del PIB por año, efectos que incluso continúan en tiempos de paz; aquí cabe preguntar: ¿será esta cifra similar para Colombia?

18 Es necesario considerar que si fuera posible hacer cálculos para un período, este registro anual puede subestimar el efecto de crecimiento a largo plazo, que se podría agravar con el deterioro institucional causado por la expansión del conflicto. Además, el conflicto crea otros fenómenos difíciles de cuantificar en costos como los desplazamientos y la mortandad.

Reconociendo el problema que se tiene con la medición y aceptando la invitación de recurrir a otros estudios internacionales como fuente de hipótesis para calcular los costos del conflicto en Colombia, se puede iniciar la exposición de esta última sección agrupando los costos del conflicto en dos: los económicos y los sociales. Los primeros, que son los más fáciles de identificar, son todos aquellos que causan daños a la infraestructura del país, tales como sistemas de comunicación, torres de transmisión de energía, carreteras, puentes y aeropuertos, como también los que se le hacen a los sectores como el agrícola y la administración pública. A lo anterior, se le debe agregar los costos indirectos o de oportunidad, que surgen al tener en cuenta en el análisis el desvío que se hace de los recursos escasos de actividades productivas a improductivas, convirtiéndose en unos costos económicos más considerables en el conflicto.

En Colombia, al igual que otros países con conflictos internos, se ha generado una ineficiencia económica, pues una buena parte de sus recursos, que podrían ser utilizados en actividades productivas, se han redireccionado a la violencia política. Siendo el Estado uno de los agentes que

mayores recursos destina a estas actividades, a través de incrementos cada vez mayores de gasto militar (Posada y González, 2001).¹⁹ Entre 1991 y 2001, el Estado colombiano aumentó de manera importante los recursos destinados a la defensa y la seguridad, pasando de \$0.96 billones a \$2.2 billones de pesos, lo que representa un incremento del 134% (Cuartas, 2004). Esta cifra sería necesario describirla como porcentaje del PIB colombiano y compararla con los cálculos de Collier (2004, p. 3), que advierte como en un país promedio en desarrollo,²⁰ los gastos militares en situación de paz equivalen a un 2.8% del PIB y en conflicto estos se elevan a 5%. Adicionalmente, se deben considerar los recursos desviados y controlados por las fuerzas rebeldes, que no son fácilmente cuantificables (DNP y BID, 1999).²¹

Finalmente, es necesario hacer dos cálculos: el primero asociado a la fuga de capitales causada por el conflicto, que aleja más la inversión en actividades productivas. En el contexto internacional, durante épocas de guerra, se ha encontrado que la fuga de capitales llega al 20% del capital privado, cifra que en la primera década después de la guerra aumenta hasta el 26,1% (Boyce

19 Pero esto no ocurre solo para el gasto público, también hay que contabilizar el gasto de la insurgencia y grupos distintos al Estado, que participan en la guerra y que igualmente destinan recursos al conflicto y no en actividades productivas.

20 Definido como un país con un producto interno bruto (PIB) *per cápita* inferior a 3.000 dólares en 1995.

21 Lo problemático es que una vez terminado el conflicto la disminución en el gasto militar es solo del 0.5%, ubicándose así en un 4.5% lo que es un incremento de 1.7% por encima del periodo preconflicto. Es así, como en el conflicto típico la pérdida total de ingreso se acumula hasta cerca de un 60% del PIB de un año (Boyce 1995). Otra investigación de Knight, Loayza y Villanueva (1996) calcularon que “el 2.2% adicional del PIB en gasto en el ejército y sostenido durante los siete años, que es la duración del conflicto típico, llevaría a una pérdida permanente de cerca del 2% del PIB” (Citado por Collier, 2004, p. 4). Esto lleva, utilizando cálculos simples, a que “después de una guerra civil típica de siete años de duración, los ingresos fueran casi 15% más bajos que si la guerra no hubiera ocurrido, lo que implica un incremento aproximado de 30% en la incidencia de la problema absoluta” (Collier, 2004, p. 7).

1995); reflejándose de esta forma una clara falta de confianza en la economía y en la estabilidad política. El segundo, es incluir en los costos económicos los daños a propiedades de los civiles, como casas, vehículos, enseres domésticos y en general los bienes de la población. Pues a consecuencia de estos dos costos, según Collier, se pasa de tener un 9% en promedio de riqueza privada en el extranjero a la sorprendente cifra del 20%, que coloca a un país en conflicto en una situación donde más de una décima parte del acervo de capital privado es transferido al extranjero (2004, p. 5).

El segundo grupo de costos que tiene el conflicto son los sociales. Los más visibles son aquellos que se realizan a bienes materiales como el caso de saqueos, destrucción de viviendas, escuelas y servicios de salud. Pero los más importantes y difíciles de cuantificar son los que se hacen a las personas: el conflicto causa víctimas mortales y el desplazamiento de la población. Los conflictos en el mundo han dado un giro en menos de un siglo: a comienzos del siglo XX el 90% de las víctimas fueron soldados, mientras que en 1990 el 90% de las víctimas mortales de los conflictos fueron civiles.²² Esto ilustra claramente como los conflictos armados afectan y tienen un costo social cada vez mayor.

Las muertes por el conflicto, no solo de los soldados y otras personas directamente implicadas en él, la población civil, niños y adultos aumentan las tasas de mortalidad en forma notoria durante y especialmente

después de la misma. Estudios internacionales sugieren que durante el conflicto la tasa de mortalidad infantil se incrementa en un 13%, cifra que después de cinco años de terminado el conflicto se encuentra en un 11% superior al valor preconflicto (Ryan 2005). Para los adultos las cifras son incluso más dramáticas y, lo que es más diciente, no están relacionadas directamente con el combate. Los conflictos producen retrocesos técnicos que generan cambios en las condiciones de vida y hacen más difícil estar saludable y carencia de recursos del gobierno para gastos en salud pública (Collier (2005); Goodman (2005) y MacMillan (2005)). De igual forma, las condiciones de vida sufridas por los refugiados y sobrevivientes generan condiciones que afectan la salud mental en el largo plazo.

El conflicto colombiano ha estado perneado por la violación flagrante de los derechos humanos y el desplazamiento cada vez mayor de la población civil. Una forma evidente de observar los costos sociales del conflicto es el desplazamiento forzado interno (Cuadros 8 y 9). Un fenómeno que no es reciente en el país, pues según Uribe y Velásquez (1995) durante el periodo 1983-1993 hubo en Colombia 1.228 masacres con 7.742 víctimas. Para 2002 este fenómeno se había agravado y sobrepasado los dos millones de personas en tan solo un poco más de una década (1990-2002); generándose con ello una grave situación de inestabilidad social para esta población al perder sus activos, lazos sociales, espacios

22 Se ha argumentado que una razón para convertir a los civiles en objetivo militar se debe a que el desplazamiento de grandes fracciones de la población disminuye la eficacia combativa del enemigo, ya que no se puede ocultar y lograr apoyo con tanta facilidad. Adicionalmente, y ahora el caso del Estado, se desvían recursos en el manejo de estas poblaciones que de otra forma podrían ser usados en el conflicto (Goodman, 2005).

culturales tradicionales y su modo de vida; viéndose obligados a llegar a sitios en donde son marginados, estigmatizados y en donde

ven, por tanto, reducidas sus expectativas de sobrevivencia y mejora de su precaria condición (Cuartas, 2004).

Cuadro 8
Colombia: porcentaje de desplazados por autores, 1985-2001

Autores	198 - 1994(1)	1995 - 1997(1)	2000 - 2001(2)
Guerrilla	32%	28%	12,32%
Paramilitares	21%	40,6%	45,67%
Fuerza pública	27%	13,6%	0,65%
Más de un actor (Enfrentamientos)	20%	17,8%	15%

Fuente: (1) DNP-UDRU; (2) RSS.

Cuadro 9
Colombia: evolución del desplazamiento forzado, 1990-2001

Año	1990	1995	2001
Número de desplazados	77.000	89.000	342.000
Total desplazamiento por cada 5 años	470.000 (1987 - 1991)	457.000 (1992 - 1996)	1.512.000 (1997 - 2001)
Total desplazados			2.502.000

Fuente: SSPD, CODHES.

Otros costos sociales que igualmente hay que empezar a calcular son los secuestros y la pérdida de capital social. Los secuestros se han constituido en otra variable importante a considerar, en la medida que Colombia se ha convertido en uno de los países con mayor tasa de secuestros en el mundo, al registrar 5.9 casos por cada cien mil habitantes. En este grave flagelo está implicado el sector productivo (empresarios, comerciantes, ganaderos y agricultores), el Estado (las fuerzas armadas o políticos) y los medios de comunicación (periodistas). Frente al capital social, el Banco Mundial (Collier 2005) también identifica una clara pérdida de este, dado que el conflicto cambia comportamiento y percepción de los individuos, los vuelve en algunas ocasiones

más corruptos y en otras más pesimistas, pues usualmente han perdido miembros de su familia, amigos, medios de vida e identidad. Adicionalmente, los costos de la guerra civil continúan afectando a la sociedad, desde diversas perspectivas, años después de finalizada.

También están los costos en el bienestar, evidenciados en la pérdida de ingresos por causa del conflicto. Por ejemplo, en la época del recrudecimiento del conflicto armado interno, en la segunda mitad de la década de 1990, hubo una disminución del ingreso per cápita de los colombianos, pasó de US\$ 2.400 en 1995 a US\$ 2.043 en 2000, creando un empobrecimiento de la población (Cuadro 10), esto aunque

no puede ser atribuible todo al conflicto si tiene algún grado de responsabilidad. Idea desarrollada por Stern (2004) donde muestra una correlación directa entre países en guerra civil y crecimiento de los

ingresos per cápita negativa. Lo mismo pasó con el ahorro en los últimos 25 años que tuvo una tasa promedio del 18% del PIB, pero se deterioro en el segundo lustro de la década de 1990.

Cuadro 10
Colombia: Producto interno bruto per cápita, 1990-2000 (en dólares)

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PIB	2.122	1.853	2.166	2.236	2.326	2.400	2.404	2.421	2.392	2.241	2.043

Fuente: CEPAL, citado por Cuartas, 2004.

Para el Banco Mundial es claro que el conflicto afecta no solamente a los directamente implicados en él sino también y de manera significativa a la población civil, a los menores de edad e, incluso, a los países vecinos. Este fenómeno político reduce los ingresos de sus habitantes, perjudica la salud pública y se convierte en un mal público regional. Los conflictos armados internos crean espacios donde los derechos de propiedad se irrespetan y la intervención del Estado a través de políticas públicas es casi imposible. Esto queda evidenciado en las zonas afectadas por el conflicto, donde “uno de los principales usos que se da a este territorio es producir y transportar drogas ilícitas: 95% de la producción mundial de drogas duras ocurre en países con guerras civiles y las principales rutas de suministro atraviesan territorios en conflicto” (Collier, *et al.*, 2004, p. xx).

Finalmente, se tienen los costos de los países vecinos, que, aunque son también económicos y sociales, no se tienen en cuenta en los análisis del país, pero que mirados regionalmente pueden llegar a ser muy significativos. El conflicto colombiano se ha caracterizado por afectar a los países vecinos: según Ramírez (2006) entre 1980 y 1997 “había presencia de agentes de

violencia en el 56,96% de los municipios fronterizos colombianos, la cual equivale al 7% del total de presencia nacional de guerrilla y paramilitares. El 44,3% de esa presencia fronteriza correspondía a seis de los siete departamento colombianos cercanos a Venezuela, 5.0% en los cercanos a Ecuador, 3,8% a Panamá, 2,53% a Brasil y 1,27% a Perú” (p. 127). Una de las causas de la expansión del conflicto colombiano a los países vecinos es, según Ramírez (2006), la debilidad o ausencia del Estado en las fronteras, que permitió que tanto guerrilla como paramilitares incrementaran su presencia, buscando conseguir mayor poder logístico para expandir sus negocios de drogas, armas y contrabando de gasolina. Además, en las fronteras se “ubican importantes recursos o cultivos de coca y laboratorios para su procesamiento” (p. 131).

Un costo social evidente del conflicto para los países vecinos lo constituye el fenómeno de los refugiados. Tener vecinos en conflicto exige cargar con los costos de la población desplazada y con la reducción del comercio interregional e internacional (al destruir la producción y generar situaciones de tensión y riesgo que son evitadas por los agentes comerciales). El conflicto causa enfermedades, epidemias y angustia de

los refugiados se extienden a la población de los países vecinos receptores. Además, los males mundiales de la guerra como las drogas duras (opio, cocaína, etc.), el Sida y el terrorismo (Harbom y Wallensteen, 2004). De esta manera los conflictos internos causan daños al desarrollo económico de la región, debido a que por la dinámica interna del conflicto se produce una reducción del PIB de los países vecinos. Según estadística de Collier (2004) la pérdida en el PIB de cada uno de los vecinos de los países en conflicto puede llegar hasta el 0.5% de sus respectivos PIB. La conclusión es que la dimensión internacional también es clave y determinante para una adecuada comprensión de los costos del conflicto y es necesario incluirla en los cálculos que se hacen de él.²³

Conclusiones

Este artículo, haciendo una revisión de la literatura económica sobre el conflicto interno colombiano entre 1990 y 2006, mostró como este enfoque disciplinar viene desarrollando herramientas teóricas que le permiten analizar las acciones indebidas de los agentes, pasando de ser un fenómeno poco estudiado por él a convertirse en un objeto central de investigación en años recientes. En la primera parte, se quiso resaltar esta historia, enfatizando que desde hace mucho tiempo el tema del conflicto ha sido materia de estudio y controversia entre las ciencias sociales, pero solo ha sido tomado con propiedad por los economistas recientemente. Estos han venido desarrollando un cúmulo de herramientas teóricas que les permiten analizar los conflictos armados internos y extraer de ellos importantes

conclusiones, aunque también vacíos que es necesario seguir trabajando.

El análisis microeconómico ha mostrado que tiene virtudes, en la medida que permite enfatizar en el comportamiento económico de los agentes implicados en el conflicto. Además, el hecho de reducir el conflicto a causas únicas o simples, puede presentar rendimientos analíticos importantes, poniendo de relieve aspectos como la identificación de actores y sus comportamientos, que ayudan a explicar más claramente los fenómenos conflictivos. Pero, es necesario advertir que un análisis netamente económico debilita el análisis al dejar por fuera otros aspectos sociales, históricos y políticos, imprimiéndole un sesgo ideológico.

En este sentido, es necesario un trabajo más transdisciplinario. Acogiendo la propuesta Gutiérrez y Sánchez (2006), “podría ser fructífero ahondar en el esfuerzo por observar sistemáticamente las interrelaciones de esos tres componentes: lo político, lo criminal y lo económico. Un programa de investigación a futuro debe dar cuenta del tejido social que se constituye alrededor de tales interacciones” (p. 17). La conceptualización de la violencia armada dentro de un marco más amplio es prioritaria para la elaboración de políticas que aspiren a reducir el espeluznante número de bajas relacionado con una u otra forma de “regulación económica”.

Por el momento, los estudios económicos del conflicto armado interno colombiano, dan clara muestra de la atrocidad de la guerra y de la lógica que se ha adoptado

23 De igual forma, Collier (2004) resalta la importancia de los actores internacionales en el acompañamiento de los países en conflicto, en los procesos de paz, reconstrucción posconflicto y consolidación de los gobiernos.

después de 1990. Una lógica económica que se viene apoderando de los actores del conflicto, que viene enfatizando en la consecución de medios de financiación a través de la protección de actividades relacionadas con los cultivos ilícitos, percibiendo por ello retribuciones económicas de narcotraficantes. De esta forma, se ha producido un cambio en la forma de financiar el conflicto en Colombia, teniendo en la droga su “combustible”. No obstante, no se puede perder de vista que la droga es un medio y no un fin de la lucha.

Pero, no todos los estudios mostrados enfatizan en la economía de la droga, se mostró también que las desigualdades sociales son factores también que causan el conflicto y lo profundizan. No en el sentido que la pobreza absoluta cause el conflicto, sino que fomenta las economías de mercado negro, donde el intercambio económico es regulado, en última instancia, por el recurso a la violencia, por la competencia agresiva de recursos comercializables internacionalmente y la perspectiva de obtener altas ganancias, aunque ilegales. De esta lógica tampoco se sale el Estado, para quien la lucha contra las drogas se ha convertido en un medio para conseguir recursos a través de reformas tributarias que le permiten aumentar el gasto público en defensa y el apoyo del gobierno norteamericano a través del Plan Colombia y la guerra antiterrorista.

La tercera sesión sobre los costos económicos y sociales, mostró como para el Estado, la sociedad civil, la guerrilla y demás grupos armados e, incluso, para los países vecinos, el conflicto interno está teniendo costos considerables. Estos, aunque no están claramente calculados, colocan a los implicados en el conflicto en una situación, cataloga por Zartman (2000), de empate mutua-

mente doloroso (*mutual hurting stalemate*). Este hecho, según Pizarro (2006), hace que se pueda pensar en un acercamiento entre las partes para negociar el conflicto, pues estamos en un período favorable para una salida negociada al conflicto: “existe un reconocimiento compartido entre todos los actores enfrentados de la imposibilidad de alcanzar una victoria por la vía militar, por lo cual su persistencia tiene costos profundos para unos y otros actores” (p. 200). En este sentido, para Restrepo (2006) las opciones realmente disponibles para el gobierno son o buscar la paz por la vía exclusivamente militar o procurarla mediante una combinación de presión militar y negociación. Ninguna solución negociada es posible mientras la presión militar de una de las partes o de ambas persuada a los contrincantes de la necesidad de transgredir.

Para finalizar, de nuevo es bueno enfatizar que la economía presenta herramientas valiosas para el adecuado análisis y comprensión de los conflictos armados internos, así como técnicas y metodologías para la adecuada representación a través de indicadores de los mismos. Sin embargo, es importante reconocer que los problemas subyacentes en los conflictos armados se expanden por fuera de los elementos económicos y, por tanto, el pretender explicar un conflicto única y exclusivamente desde este enfoque sería limitar la comprensión del mismo. La economía provee información y elementos vitales para el estudio de los conflictos, pero estos deben colocarse en un contexto adecuado y amplio que permitan su interpretación (Tamayo, 2006). Es necesario seguir trabajando en los cálculos que permitan mostrar los reales efectos del conflicto armado interno en la economía colombiana.

Referencias bibliográficas

- AGUILERA Peña, Mario (2006). "ELN: entre las armas y la política". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- ARROW, Kenneth (1963). *Social Choice and Individual Values*. 2a. Ed. New York: Wiley.
- BAUMOL, William J. (1990). "Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive". *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No 2, pp. 169-217.
- BECKER, Gary (1968). "Crime and punishment: an economic approach". *Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5, pp. 893-921.
- _____ (1980). "El enfoque económico del comportamiento humano". *Información comercial española*, Revista de economía, No. 557, pp. 11-18.
- BONILLA, Adrián (2004). "Las dimensiones y las condiciones de regionalización del conflicto colombiano". *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz en Colombia*, RET de la Universidad Nacional, pp. 133-143. Bogotá.
- BOULDING, Kenneth (1962). *Conflict and Defense*. New York: Harper and Brothers.
- BOTTIA, Martha (2003). "La presencia y expansión municipal de las FARC: es avaricia y contagio, más que ausencia estatal". *Documento CEDE* No. 2003-03. Bogotá.
- BOYCE, J. K. (1995). "Adjustment toward peace: An introduction". *World Development* Vol. 23, No. 12, pp. 2.067-2.077.
- BUHAUG, Halvard y GATES, Scott (2002). "The Geography of Civil War". *Journal of Peace Research*, No. 39, pp. 417-433.
- CAMACHO, Álvaro (2003) Prólogo. En: Richani, Ignacio (2003). *Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia*. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Iepri. Universidad Nacional de Colombia. Editorial Planeta colombiana, S.A.
- CASTRO, Manuel; ARABIA, Jorge; CELIS, Andrés (1999). "El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia". *Revista Planeación y Desarrollo*, Vol. 30, No. 3, jul.-sep. DNP.
- CÁRDENAS, M (2000). *Costos del conflicto armado y escenario económico de paz*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
- COLLIER, Paúl *et al.* (1998). "On economic causes of civil war". *Oxford Economic Papers*, No. 50, pp. 563-73.
- _____ (1999) "On economic consequences of civil war", *Oxford Economic Papers*, No. 51, pp. 168-183.

- _____ (1999). *Doing Well Out War, paper prepared for the Conference on Ecomic Agendas in Civil Wars*, April 26-27, London.
- _____ (2000). "Rebellion as a Quasi-Criminal Activity". *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 44, No. 6, pp. 939-854.
- _____ (2001) *Economic Causes of Civil Conflict and their implications for policy*, World Bank. Washington.
- _____ (2004). *Guerra civil y políticas de desarrollo. Cómo escapar de la trampa del conflicto*. Bogotá: Banco Mundial y Alfaomega.
- _____ (2005). "El desafío global de los conflictos locales". Serie Desarrollo Para Todos. Banco Mundial.
- _____ y HOEFFLER, Anke (1999). "Justice-seeking and Loot-seeking in civil war". *Working paper*, World Bank.
- _____ (2001). "Greed an Grievance in Civil War". *Development Research Group*, Wold Bank. Washigton.
- COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA. (1987). *Colombia: Violencia y Democracia*. Bogotá: Colciencias y Universidad Nacional de Colombia.
- COMMONS, John (1927). *Legal Foundations of Capitalism*. New York: Macmillan.
- _____ (1934). *Institutional Economics*. Madison: University of Wisconsin Press.
- CUARTAS Celis, Deiman León (2004). *Inequidad, violencia y criminalidad en Colombia Durante la década de los años noventa*. Monografía para optar al título de Economista Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Escuela de economía. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
- CUBIDES, Fernando (1999). "Los paramilitares y su estrategia". *Reconocer la Guerra para Construir la Paz*. Bogotá: CEREC.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1999). *La paz: el desafío para el desarrollo*. Bogotá: Departamento de Planeación Nacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Noruego de Cooperación.
- ECHANDÍA, Camilo (1999). *Geografía del conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en Colombia*. Bogotá: Vicepresidencia de la República.
- _____ (2000). "El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos". *Colombia Internacional*, Bogotá, Nos. 49-50, pp. 117-134.
- ECHEVERRY, J, SALAZAR, C. y NAVAS, V (2000). "La violencia en el municipio colombiano: un análisis de la distribución regional de los hechos de violencia". *Seminario de Economía de la Cátedra Colombia*. Bogotá.

- _____ (2001). "el conflicto colombiano en el contexto internacional". Martínez, Astrid, (2001) *Economía, crimen y conflicto*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- ELWERT, Georg (2003). "Mercados de violencia y política de ayuda e intervención". Kalulambi Pongo, Martin (Ed.) *Perspectivas Comparadas de mercados de violencia*. Bogotá: Alfaomega y Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
- ESTEBAN, Joan, RAJ, Debraj (1999). "Conflict and Distribution". *Journal of Economic Theory*, No. 87, pp. 379-415.
- EUROPEAN COMMISSION (2000). "EU support of the Colombian peace process". [Artículo en Internet]. Disponible en: [http:// europa.eu.int/comm./external-relations/Colombia/intro/index.htm](http://europa.eu.int/comm./external-relations/Colombia/intro/index.htm). Fecha de acceso: 27 de septiembre de 2000.
- FORIGUA Rojas, Emersson (2006). "Las nuevas guerras: un enfoque desde la estructuras organizacionales". *Papeles Políticos*, Bogotá, Vol. 11, No. 1 ene.-jun. pp. 305-352.
- GAITAN, Fernando (1995). "Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia". Deas, Malcom y Fernando Gaitan. *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: Fonade-DNP.
- GARFINKEL, Michelle y SKAPERDAS, Stergios (2000) "Conflict without misperceptions or incomplete information: How the future matters". *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 44, No. 6, pp. 792-806.
- GIDDENS, Anthony (1987). *The Nation-State and Violence*. Berkeley: University of California Press.
- GÓMEZ, Carlos Mario (2001). "Economía y violencia en Colombia". Martínez, Astrid, (2001) *Economía, crimen y conflicto*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- GOODMAN, R. (2005). "Solving the war puzzle: Beyond the democratic peace". *American Journal Of International Law* Vol. 99 No. 2, pp. 507-515.
- GORBANEFF, Yuri y JÁCOME, Flavio (2000). "El conflicto armado en Colombia. Una aproximación a la teoría de juegos". *Archivos de Macroeconomía*, Documento 138. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Análisis Macroeconómico.
- GROSSMAN, Herschel (1991). "A general equilibrium model of insurrections". *The American Economic Review*, Vol. 81, No. 4, pp. 912-921.
- _____ (1994a). "Proprietary public finance and economic welfare". *Journal of Public Economics*, No. 53, pp. 187-204.
- _____ (1994b). "Production, appropriation and land reform". *The American Economic Review*, Vol. 84, No. 3, pp. 705-712.
- _____ (1995). "Insurrections". Hartley. K. and T. Sandler (eds.), *Handbook of Defense Economics*, Elsevier. New York
- _____ (1998). "Producers and predators". *Pacific Economic Review*, No. 3, pp. 169-187.

- _____ (1999). "Kleptocracy and revolutions", *Oxford Economic Papers*, No. 51, pp. 267-283.
- _____ (2000a). "Make us a king": anarchy, predation, and the state. *Working paper*, Brown University.
- _____ (2000b). "The State: agent or proprietor". *Economics of governance*, Vol.1 No. 1, pp. 3-11.
- GROSSMAN, H. y Kim, M. (2000). "Predation, efficiency and inequality". *Working paper*, Brown University.
- GONZÁLEZ, Olga (2001). "Espero que haya ideas alternativas". *El Espectador*, 1 de mayo de 2001.
- GUTIÉRREZ, Francisco y SÁNCHEZ Gonzalo (2006). "Prologo, Nuestra guerra sin nombre". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- GUTIÉRREZ, Francisco y BARÓN, Mauricio (2006). "Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. Notas para una economía política del paramilitarismo, 1978-2004". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- HAAVELMO, Trygve (1954). *A Study in the Theory of Economic Evolution*, New Haven.
- HARBOM, L. y P. WALLESTEEN (2004). "Armed conflict and its international dimensions, 1946-2004". Uppsala: Uppsala University.
- HEYMAN, Josiah (Ed.) (1999). *States and Illegal Practices*. New York: Berg.
- HIRSCHLEIFER, Jack (1988a). "Conflict and rent seeking: ratio vs. difference models". *Working paper* No. 491, UCLA.
- _____ (1988b). "The analytics of continuing conflict". *Synthese*, No. 76, pp. 201-22.
- _____ (1990). "The technology of conflict as an economic activity". *Working paper* No. 597, UCLA.
- _____ (1995). "Theorizing about conflict". Hartley, K. y T. Sandler (eds.), *Handbook of Defense Economics*, New York: Elsevier.
- _____ (2001). *The Dark Side of the Force*. Cambridge: Economic Foundations of Conflict Theory, Cambridge University Press.
- OBSBAWN, Eric (2001). *Bandidos*. Barcelona: Crítica.
- ISAZA D. José Fernando y CAMPOS R. Diógenes (2005) "Modelos dinámicos de guerra: El conflicto colombiano". *Revista Academia Colombiana de Ciencias*, Vol. 29, No. 110. pp. 133-148.
- KALDOR, Mary (2001). *Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets.
- KNIGHT, M., LOAYZA, N. y VILLANUEVA, D. (1996). "The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth". *IMF Staff Papers* Vol. 43, No. 1, pp. 1-37.

- MACMILLAN, M. (2005). "Making war, making peace: Versailles, 1919." *Queens Quarterly* Vol. 112, No. 1, pp. 9-18.
- MARTÍNEZ, Astrid, (2001). *Economía, crimen y conflicto*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- MCGUIRE, M. y OLSON, M. (1996). "The economics of autocracy and majority rule: The invisible hand and the use of force". *Journal of Economic Literature*, Vol. 34, No. 1, pp. 72-96.
- MONTENEGRO, Armando y POSADA, Carlos Esteban (1995) "Criminalidad en Colombia". *Coyuntura Económica*, Vol. XXV, No 1.
- MOORE, Barrington (2000). *Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia: el señor y el campesino en la formación del mundo moderno*. Barcelona: Península.
- MUNKLER, Hefried (2004). "Las guerras del siglo XXI". *Análisis Político*, No. 51, mayo-agosto, pp. 3-11.
- NITZAN, Shmuel (1991). "Collective Rent Dissipation". *The Economic Journal*, Vol. 101, No. 409, pp. 1.522-1.534.
- OLSON, Marcus (1993). "Dictatorship, Democracy and Development". *The American Political Science Review*, Vol. 87, No. 3, pp. 567-576.
- ORTIZ, Carlos (2001). "La violencia y el municipio colombiano". Martínez, Astrid, (2001) *Economía, crimen y conflicto*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- OSPINA, Paula (1996). *Gasto Público y Privado en Seguridad*. Bogotá: Universidad Javeriana.
- PARETO, Vilfredo (1946). *Manual de economía política*. Buenos Aires: Atalaya.
- PARIS Rojas, Rodrigo (2002). "¿Unión Europea Plan Colombia, éxito o fracaso de un sueño? *Working Paper*, No. 22. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, Institut Universitari D'Estudis Europeus.
- PEÑATE, Andrés (1997). "El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado". *Documento de trabajo* No. 15. Bogotá: Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia, Universidad de los Andes.
- PIZARRO Leongomez, Eduardo (2004). *Una democracia asediada: balance y perspectiva del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Norma.
- _____ (2006) "Las FARC-ep: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri)". *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- POSADA, Carlos Esteban (1994). "Modelos económicos de la criminalidad y la posibilidad de una dinámica prolongada". *Planeación y Desarrollo*, Vol. XXV.
- _____ y GONZÁLES, Francisco (2001). "El gasto en defensa, justicia y seguridad". Martínez, Astrid, (2001) *Economía, crimen y conflicto*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (2003). *El conflicto. Callejón con salida*. Bogotá: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003.
- QUERUBÍN, Pablo (2003). "Crecimiento departamental y violencia criminal en Colombia". Documentos Cede, No. 12. Bogotá: Universidad de los Andes.
- RAMÍREZ, Socorro (2006). "Actores europeos ante el conflicto colombiano". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- RANGEL, Alfredo (1997). "El poder local: objetivo actual de la guerrilla". *Descentralización y orden público*, Bogotá: Fescol-Milenio.
- _____ (2001). *Colombia: Guerra en el Fin de Siglo*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- RESTREPO, Luis Alberto (2006). "Los arduos dilemas de la democracia en Colombia". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- _____ (2001). *Análisis económico del conflicto interno*. Departamento de Economía, Royal Holloway, Universidad de Londres, mimeo.
- RESTREPO Botero, Darío (2001). "Descentralización y violencia en Colombia". Martínez, Astrid, (2001) *Economía, crimen y conflicto*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- RICHANI, Nazih (2003a). "Conflictos Intrincados: Economías políticas de los sistemas de Guerra en Líbano y Colombia". Kalulambi Pongo, Martin (Ed.) *Perspectivas Comparadas de mercados de violencia*. Bogotá: Alfaomega y Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
- _____ (2003b). *Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Iepri. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Editorial Planeta colombiana, S.A.
- ROJAS, Diana (2006). "Estados Unidos y la guerra en Colombia". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- ROMERO, Mauricio (2002). *Paramilitares y autodefensas: 1982-2003*. Bogotá: IEPRI-Planeta.
- ROY, Joaquín (2001). "La asistencia europea a Colombia: ¿una contribución virtual a una plan virtual de paz?" *Colombia internacional*, No. 51, enero-abril de 2001. pp. 5-27.
- RUBIO, Mauricio (1998). "Rebeldes y criminales". Arocha, Jaime *et al.* (Comps.) *Las violencias: inclusión reciente*, Facultad de Ciencias Humanas, CES. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- _____ (1999). *Crimen e impunidad*. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Cede.
- _____ (2002) *Conflicto y finanzas públicas municipales*. Documento CEDE No. 2002-17. Bogotá.

- RUFIN, Jean-Christophe y JEAN, Francois (Eds.) (1996). *Les economies de guerre dans les conflits internes*, Hachette. Paris
- RYAN, B. J. (2005). "Democracy and ethnic conflict: Advancing peace in deeply divided societies." *Millennium-Journal Of International Studies*. Vol. 33, No. 3, pp. 917-919.
- SALAZAR, J. (2005) *La financiación de las FARC: un resultado de su estrategia guerrillera*, Tesis de maestría para optar al título de Magíster en Economía, PEG-Facultad de Economía. Bogotá: Universidad de los Andes.
- SALAZAR, Boris y CASTILLO, María del Pilar (2001). *La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*. Cali: Centro de Estudios de la Realidad Colombiana (Cerec) y Facultad de Ciencias Económica y Sociales (Cidse) de la Universidad del Valle.
- SANCHEZ, Fabio y CHACON, Mario (2006). "Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002". Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.
- SCHELLING, Thomas (1960). *The strategy of conflict*. London: Oxford University Press.
- _____ (1966). *Arms and Influence*. New Haven: Yale University Press.
- _____ (1967). "Economics and criminal enterprise". *The Public Interest*, No. 7, pp. 61-78. Reimpreso en Schelling T. C. (ed.) (1984) *Choice and Consequence*. Cambridge: Harvard University Press.
- _____ (1989). *Micromotivos y macrocomportamientos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- SKAPERDAS, Stergios (1992). "Cooperation, conflict and power in the absence of property rights". *The American Economic Review*, Vol. 82 No. 4, pp. 720-739.
- SKAPERDAS, Stergios y SYROPOULOS, Constantinos (1995). "Gangs as primitive states". Fiorentini, Gianluca y Peltzman, Sam (1995). *The Economics of Organised Crime*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____ (1996). "Can the shadow of the future harm cooperation? *Journal of Economics Behaviour and Organization*, No. 29, pp. 355-372.
- SMITH, Adam (1956). *Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones*. México: Fondo de Cultura Económica.
- STERN, Nicholas (2004). "Prólogo". Colier, Paul, et. al. (2004). *Guerra civil y políticas de desarrollo. Cómo escapar de la trampa del conflicto*. Bogotá: Banco Mundial y Alfaomega.
- TAMAYO, Víctor (2006). Quinta relatoría, Seminario de Investigación I, *Teorías y métodos en el estudio de la guerra*, de la línea: Guerra, conflicto armado y dinámica social. Maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos. Medellín: Universidad de Antioquia.

- TILLY, Charles. (1971). "Revolution and collective Violence". Greestein *et.al* (ed) *Hadsboof of political science*, Vol. 3, Addison Wekskey.
- _____ (1985). "War Marking and State Marking as Organized Crime". Evans, Perter; Rueschemeyer, Dietrich y Sckopol, Theda (Eds.) *Bringing the State Back in*. Cambridge: Cambridge University Press.
- TULLOCK, Gordon (1967). "The welfare costs of tariffs, monopolies and theft". *Western Economic Journal*, Vol. 5, pp. 224-32.
- _____ (1980). "Efficient Rent Seeking". Buchanan, J.M. Tollison R.D.y Tullock. G. (1980). *Toward a Theory of the Rent Seeking Society*, College Station: Texas A. y M. University Press, pp. 97-112.
- URIBE, María Victoria y VELÁSQUEZ, Teófilo (1995). *Enterrar y callar. Las masacres en Colombia, 1980-1993*, Comités Permanentes por la Defensa de los Derechos Humanos. Bogotá.
- VÉLEZ, María A. (2000). *FARC-ELN: Evolución y Expansión Territorial*. Bogotá: CEDE - Universidad de los Andes.
- WOOD, Elizabeth (2000). *Insurgent Collective Action in El Salvador*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ZARTMAN, William (2000). "Ripeness. The Hurting Stalemate and Beyond". Stern, Paul y Druckman, Daniel (eds.) *International Conflict Resolouition after the Cold War*.